IV. EXPEDIENTE T 5383796 - SENTENCIA SU-442/16 (Agosto 18)
M.P. María Victoria Calle Correa

La Sala Plena de la Corte Constitucional unificó los criterios conforme a los cuales procede la aplicación de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez. En el caso concreto, concedió la protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de una persona de la tercera edad, de escasos recursos, que carece de ingresos para subsistir y vive de la caridad, toda vez que se encuentra gravemente enferma y tiene una pérdida de capacidad laboral de 50.21%, que le impide trabajar. Al carecer de una fuente de ingresos y estar en incapacidad de proveérsela, experimenta un obstáculo objetivo para gozar efectivamente del derecho a una vida digna. Para remediar esta situación, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y el pago de la pensión de invalidez. No obstante, la entidad no se la otorgó sobre la base de que no cumplía con lo previsto en la norma vigente –Ley 860 de 2003- que exige 50 semanas de cotización durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Así mismo, le indicó que no era aplicable el principio constitucional de la condición más beneficiosa, pues este solo permitiría analizar una solicitud pensional a la luz de los requisitos previstos en la norma inmediata anterior a la vigente, que en este caso resulta ser la Ley 100 de 1993 en su redacción original, que exigía una densidad de aportes que tampoco logró satisfacer el actor. De esta forma, pese a que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el accionante reunió 359 semanas de cotización y cumplió entonces con el requisito exigido para pensión en el Decreto 758 de 1990, se le negó la pensión de invalidez, lo cual pone en evidencia que al actor se le vulneró su derecho a la seguridad social, por no aplicar el principio constitucional de la condición más beneficiosa en la determinación de las normas aplicables a su pensión.

La Corte determinó que por haber reunido más de 300 semanas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, momento para el cual su situación estaba gobernada por el Decreto 758 de 1990, se forjó entonces para el accionante una expectativa legítima de que en lo pertinente, este requisito le sería respetado. Si bien el legislador podía introducir ajustes o incluso reformas estructurales al sistema pensional, debía hacerlo en un marco de respeto por los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. En vista de que la ley no contempló un régimen de transición en materia de pensiones de invalidez que las garantizara, debe preservarse para el accionante, quien cumplió oportunamente uno de los requisitos relevantes para pensionarse, el derecho a que este aspecto no le fuera cambiado drásticamente en la medida en que resultara beneficioso para su seguridad social. Por lo mismo, en este caso, la pensión de invalidez del actor debía resolverse conforme a lo previsto, en cuanto a la densidad de semanas de cotización, en el Decreto 758 de 1990 que exigía reunir 300 semanas en cualquier tiempo. Este requisito lo cumplió el actor de forma suficiente. A lo anterior, se suma el hecho de que, después de entrar en vigor el sistema pensional de la Ley 100 de 1993, el tutelante aportó otras 294 semanas, para un total de 653 semanas en su historia laboral, por lo cual por principio, no puede hablarse de un detrimento para la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Negarle a pensión, supuso el desconocimiento de sus derechos a la seguridad social, a la igualdad y su mínimo vital.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional procedió a revocar el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, el 11 de noviembre de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de primera instancia, del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 29 de septiembre del mismo año, en la que se había negado el amparo al accionante y en su lugar, ordenó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Esta protección se torna en definitiva, en vista de la concurrencia objetiva y cierta de los requisitos para pensionarse y de las condiciones de debilidad manifiesta del actor. Con tal objeto, se ordenó a Colpensiones que en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, le reconozca al accionante la pensión de invalidez a la que tiene derecho conforma lo expuesto, y proceda a pagarle las mesadas pensionales respectivas, incluyendo las causadas después del 17 de octubre de 2013, por

ser ese el momento en que se estructuró su invalidez y adquirió el derecho pensional y adquirió el derecho pensional.

- **Salvamento de voto**

El magistrado **Alejandro Linares Cantillo** se apartó de la decisión anterior, por considerar que la Corte había flexibilizado el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela frente a la línea jurisprudencial trazada, para conceder el amparo definitivo de los derechos invocados por el accionante, a pesar de que existía un mecanismo judicial de defensa de los derechos del accionante. Además, en relación con el fondo, observó que de acuerdo con los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo consagrados en el artículo 53 de la Constitución y la adquisición del derecho a la pensión que según el Acto Legislativo 1 de 2005 solo se reconoce cuando se han cumplido los requisitos previstos en la ley, el principio de aplicación de la situación más favorable alude a la antinomia que se presenta en la aplicación al trabajador de normas jurídicas vigentes y no a disposiciones derogadas y cuando se trata de regímenes de pensión, esa favorabilidad debe predicarse respecto del régimen inmediatamente anterior al vigente y no de cualquier estatuto pensional entre los que han sido expedidos en el ordenamiento. Advirtió, que la interpretación que se hace en este caso para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones, que también es un principio constitucional que garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos pensionales de todos los afiliados.

LA CORTE CONSTITUCIONAL CONCEDIÓ EL AMPARO DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE DOS EXTRABAJADORES DE EMBAJADAS EN COLOMBIA CONDENADAS POR LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL